TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de
dos mil veinticuatro (2024).

Ref: Liquidación de sociedad conyugal de Alix
Andrea Aldana Amaya c/. Juan Sebastián
Melo Insuasty. Exp. 25307-31-84-002-
2021-00231-01.

Pasa a decidirse el recurso de apelación
interpuesto por el demandado contra el auto de 23 de agosto
del año anterior proferido por el juzgado segundo promiscuo
de familia de Girardot, mediante el cual resolvió las
objeciones formuladas por las partes a los inventarios y
avalúos, teniendo en cuenta los siguientes,

I.- Antecedentes

En firme la sentencia de 18 de abril de 2018
dictada por el juzgado de familia de Fusagasugá que decretó
de mutuo acuerdo el divorcio del matrimonio civil contraído
entre las partes el 29 de diciembre de 2011 y, como
consecuencia, ordenó la liquidación de la sociedad conyugal
conformada entre las partes, la demandante propuso el
respectivo trámite liquidatorio.

El citado despacho judicial decretó su apertura
por auto de 3 de abril de 2019 y lo tramitó hasta el 26 de
febrero de 2021, en que a solicitud de la demandante declaró
la pérdida de competencia para continuar conociendo del
proceso, por lo que la Sala de Gobierno del Tribunal,
mediante acuerdo 55 de ese año, tras encontrar acreditados
lo presupuestos del artículo 121 del código general del

proceso y de la sentencia C-443 de 2019, asignó el conocimiento del asunto a los juzgados promiscuos de familia de Girardot.

El proceso le correspondió por reparto al juzgado segundo promiscuo de familia de esa localidad, despacho que por auto de 28 de septiembre de 2021, procedió a fijar fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de inventarios y avalúos.

Al efectuarse la diligencia, el demandado objetó los activos y compensaciones inventariadas por la demandante en las partidas 1 a 4, 6 a 9, 11 a 20, 22 y 25, consistentes en las tiendas de ropa ‘La Boutique’ y ‘Tu Guarda Ropa’, el vehículo de placas DNN-109, bienes muebles y enseres y equipo de oficina, y a título de recompensas los dineros correspondientes a la cuota parte de un bien social y un vehículo que fueron transferidos a un tercero, los pagos a títulos de intereses, gastos de crédito, impuestos y seguros que sufragó la demandante respecto del citado vehículo, así como los dineros que canceló por las tarjetas de crédito para compra de mercancías de los establecimientos.

Abierto a pruebas el trámite de objeción y practicadas éstas tras varios aplazamientos, en la continuación de la audiencia llevada a cabo el 19 de abril de 2023, el juzgado anunció que dictaría por escrito el proveído desatándolas; el 11 de julio siguiente pidió el demandado declarar la nulidad por pérdida de competencia y omisión en el decreto y la práctica de pruebas, aduciendo que desde que el expediente fue recibido por el juzgado han transcurrido más de dos años sin que dicte sentencia de instancia, no realizó un adecuado control frente al término que le otorgó a la actora para aportar las pruebas que no pudo presentar en la audiencia por problemas técnicos y no decretó y practicó el testimonio de Diego Alexander Garzón, que fue solicitado en la diligencia, pues el titular no verificó con detenimiento la grabación de esa audiencia que fue atendida por la juez que lo reemplazó durante su período de vacaciones.

Mediante el proveído apelado, el a-quo declaró parcialmente fundadas las objeciones, haciendo ver que las compensaciones a que aluden las partidas 4, 5, 10 a 14, 21, 23 y 24 sí debían hacer parte del activo, en la medida en que el demandado no acreditó que el dinero producto de la venta del vehículo de placas UUU-384 fue invertido para la compra del carro de placas DNN-109, así como los pagos por intereses, gastos, impuestos y seguros para la compra de ese segundo vehículo, pues habiéndose reconocido que éste fue adquirido con el crédito enlistado en la partida 5ª, al no haber sido ésta objetada, no viene procedente la exclusión de esos costos que se derivan de aquél.

A su turno, señaló que no podía declarar la pérdida de competencia para seguir conociendo del proceso porque se lo asignó la Sala de Gobierno del Tribunal, por lo que tampoco habría lugar a declarar la nulidad por vencimiento del término, pues además de que ya no opera de pleno derecho, precisamente porque no contribuye eficazmente a la materialización del derecho a una justicia oportuna, ésta constituye un obstáculo para la consecución de ese objetivo; por lo demás, ninguna inconformidad exhibió el demandante frente al decreto o la práctica de pruebas en su momento, de suerte que si existió alguna irregularidad, ésta se saneó.

La determinación, sin embargo, fue recurrida en reposición y subsidiariamente en apelación por el demandado, bajo la idea de que las solicitudes de nulidad y pérdida de competencia han debido resolverse en una determinación distinta a la que resolvió las objeciones, pues hacerlo de forma conjunta constituye un ‘exabrupto jurídico’, máxime cuando lo hizo al final del proveído cuando ya había desatado las objeciones, desconociendo que carece de competencia para seguir tramitando el proceso por haberse superado ampliamente el término previsto en el artículo 121 del código general del proceso y al estar cumplidas las exigencias a que alude la sentencia C-443 de 2019, desde que ha sido solicitada por una de las partes antes de dictarse sentencia de instancia y no se ha hecho uso de la

prórroga, algo suficiente no sólo para decretar la pérdida de competencia, sino además para declarar la nulidad de lo actuado con posterioridad al momento en que elevó esa solicitud; sin contar con que también se incurrió en una irregularidad en la etapa probatoria, porque no se decretó y practicó el testimonio de Diego Alexander Garzón, que fue solicitado oportunamente, y porque permitió que la demandante aportara documentos por fuera del plazo que le otorgó en la audiencia, configurándose así la nulidad prevista en el numeral 5° del artículo 133 del código general del proceso.

Al resolver la reposición, consideró el juzgado que debía mantener lo relativo a las objeciones y a la pérdida de competencia por no haberse formulado ningún reparo frente a ellas; no obstante, a vuelta de resaltar que no debía proveer todavía sobre la solicitud de nulidad por vencimiento del término y omisión en el decreto en la omisión y práctica de pruebas, sin darle previamente el trámite previsto en los artículos 129 y 134 del estatuto procesal, varió su decisión en ese aspecto para, en su lugar, correr traslado de esa petición a la parte demandante.

Y aunque en principio denegó la apelación formulada en subsidio, aduciendo que por la prosperidad del recurso aquélla no venía procedente, al revisar esa determinación en reposición la revocó sobre la base de que había prosperado apenas parcialmente y, como consecuencia, concedió en el efecto devolutivo el citado recurso el que, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II. El recurso de apelación

En sustento de la alzada no se ofrecieron nuevos argumentos y ésta se soportó en lo blandido en el recurso de reposición elevado.

Consideraciones

Lo primero que debe relievearse es que la competencia de la Corporación, en virtud del principio dispositivo que rige en la materia, se circunscribe únicamente a revisar la juridicidad de la decisión que resolvió las objeciones a los inventarios y avalúos, que no frente a los otros ordenamientos que en ese pronunciamiento adoptó.

Dicho en otros términos, la apelabilidad del proveído deviene únicamente de la resolución de las objeciones, que no de la decisión de denegar la solicitud de decretar la pérdida de competencia para seguir conociendo del proceso, pues por ninguna parte contempla el estatuto general del proceso la posibilidad de impugnarlo por esa vía, por lo que nada le cabe decir al Tribunal frente a ello, naturalmente que si en materia de apelaciones el sistema procesal colombiano, acude a un criterio eminentemente restrictivo, de tal manera que sólo cuentan con ese beneficio aquellos proveídos expresamente señalados en la ley, no puede decirse, entonces, que dicho medio impugnativo quepa en el caso de ahora, donde se enfila contra un auto que no se encuentra enlistado como apelable en el artículo 321 del código general del proceso, ni hay disposición especial que lo señale como tal, como tampoco de ese pronunciamiento que en principio adoptó el juzgado en punto de la nulidad solicitada por vencimiento de ese término y por las irregularidades que, dicese, acaecieron en la etapa probatoria, desde que al haber sido revocada esa decisión en reposición bajo la consideración de que para proveer sobre ésta debía primero correr traslado a la otra parte, es más que claro que el examen de la juridicidad de las razones que en su momento exhiba el juzgado, sólo podrá darse cuando finalmente se pronuncie sobre ella, que no en un momento anterior.

Pues bien. Aclarado esto, debe decirse que no hay motivos que autoricen revocar la decisión apelada; y la primera razón que salta en pos de esa conclusión, es el hecho patente de que de lo único de lo que viene quejándose el recurrente es de que el juzgado no se haya apartado del

conocimiento del proceso por configurarse la causal de pérdida de competencia en el artículo 121 del código general del proceso, pues, dicese, desde todo punto de éste ese apartamiento se impone, de lo cual no aflora ninguna aspereza relativamente a las objeciones que se declararon infundadas, aspecto que, itérase, es el único sobre el cual la Sala está habilitada para proveer.

Pero además porque, de cualquier modo, nada de irreflexivo tiene que el juzgado se haya pronunciado sobre la pérdida de competencia en el mismo proveído en que desató las objeciones a los inventarios; y no sólo porque habiéndose presentado esa solicitud dentro del trámite de objeciones, lo natural era que se desatara allí, como al efecto lo prevé el artículo 131 del citado ordenamiento, a cuyo tenor se tiene que “[c]ualquier cuestión accesoría que se suscite en el trámite de un incidente se resolverá dentro del mismo”, sino porque aun cuando en efecto la lógica sugiere que el juez en la decisión debe pronunciarse primero sobre su competencia cuando es un aspecto que está siendo controvertido, antes de examinar las objeciones, pues en caso contrario su ponderación vendría innecesaria, lo cierto es que alterar tal orden no quiere decir que puede encarársele tan duramente cuando en últimas terminó pronunciándose sobre todas las solicitudes que estaban en espera de decisión, todo lo más si las partes podían controvertir a través de los recursos procedentes las determinaciones de allí con las que mostraran desacuerdo, por supuesto que no por estar todas esas disposiciones contenidas en un mismo pronunciamiento hacen uno solo, como para poder colegir que la inconformidad con uno hace improcedente la protesta contra otro.

Lo dicho basta para confirmar el auto apelado; las costas del recurso, por su parte, se impondrán con sujeción a la regla 1ª del artículo 365 ibídem.

III. – Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto de fecha y procedencia preanotados.

Costas a cargo del recurrente. Tásense por secretaría del a-quo en el momento procesal oportuno e inclúyase la suma de \$250.000 como agencias en derecho de esta instancia.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

German Octavio Rodriguez Velasquez

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 004 Civil Familia

Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fc0cfedaaeb67404519ff55fd0e707faf99cfca5593cdea348b14c642bec327a**

Documento generado en 29/02/2024 08:36:00 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>